

Representación y re elección: un apunte desde la gobernanza electoral

Por Dr. Luis Eduardo Medina Torres, UACM-Cuautepec, eduardo.medina@uacm.edu.mx

El texto propone revisar el tema general de la representación política y su aplicación en una novedad del régimen electoral mexicano: la re elección consecutiva y limitada de los mandatos legislativos en los congresos locales de los estados del país. La perspectiva que se utiliza es la de la gobernanza electoral porque esta permite comprender las dinámicas que se presentan desde la arena legislativa con respecto a las arenas administrativa y jurisdiccional.

El supuesto inicial es que la re elección tiene que servir para mejorar la representación política y que tendría que ser discutida la regla que limita aquella. Para sostener lo anterior, en una primera sección, mostramos un apunte conceptual sobre la representación política y la gobernanza electoral; en la segunda sección revisamos la regulación mexicana sobre re elección consecutiva y limitada; en la tercera sección mostramos las dificultades que han tenido los órganos administrativos, las demandas que se han presentado ante los tribunales electorales y las respuestas de la jurisdicción; finalmente, elaboramos algunas reflexiones a manera de conclusiones provisionales.

Un apunte conceptual sobre la representación política y la gobernanza electoral

La literatura sobre re elección ha centrado su argumento en los beneficios que aquella provoca en la representación política, especialmente por la experiencia que genera en los políticos que son confirmados en el cargo de representación popular. Esta experiencia también tiene que generar una mayor profesionalización por parte de los cuadros políticos y, en consecuencia, una mejor manera de gobernar y tomar decisiones públicas.

Así, se estipula que existe una relación positiva entre la re elección y la representación política porque aquella provoca que sean confirmados los gobernantes que se han considerados adecuados por los electores o bien sustituidos cuando los gobernados consideran que su desempeño al gobernar no ha sido el más adecuado.

Desde la literatura de la representación política (Stuart Mill, 2007; Manin, 1998) no está en discusión la idea de la elección consecutiva porque el supuesto es que la confirmación de los electores es una posibilidad que debe existir como también debe existir la posibilidad de alternar en el gobierno a los grupos que pretenden conducir los asuntos públicos.

De esta manera, tanto la literatura relacionada con la re elección como la vinculada a la representación política sostienen que la elección consecutiva es una facultad de los electores para confirmar un gobierno más que una facultad de los posibles electos para continuar en los cargos de representación pública. Volveremos sobre esto en las reflexiones finales.

Además, los estudios que se han realizado sobre elección consecutiva en el mundo muestran más elementos positivos que negativos cuando se aplica aquella. Los casos que existen de limitaciones absolutas (como es todavía en México para la presidencia y las gubernaturas) o bien de limitaciones parciales, como el caso mexicano en los cargos legislativos y municipales, se explican más por factores endógenos e históricos que propiamente por explicaciones organizacionales o de índole causal.

Es el siglo XIX mexicano lo que explica la regla establecida en la constitución de 1917: no re elección, por el recuerdo inmediato del porfiriato pero también por los intentos tantos liberales como conservadores de mantenerse en el poder durante largos periodos aunque con convocatorias regulares a elecciones. De hecho, todavía con la re elección no consecutiva de Álvaro Obregón en pleno siglo XX se comenzaba a repetir la historia de la centuria anterior.

Con el asesinato de Obregón no solamente se canceló su posibilidad de acceder de nuevo a la presidencia sino que se estableció un principio de prohibición completa a la re elección. Esta situación fue varias ocasiones eludida, ya que hubo políticos que eran postulados para diversos cargos de representación popular, aún sin haber terminado el periodo para el que fueron electos con lo que la restricción no era tan absoluta como parecía.

En síntesis, la posición mexicana sobre la negativa a la elección consecutiva se explica por la historia del siglo XIX y en alguna medida por la del siglo XX; sin embargo, no tiene ni un referente conceptual ni tampoco una remisión comparada para poder comprender las limitaciones que, inicialmente, se incorporaron en el texto constitucional de 1917 ni en el texto reformado en 2014.

Si hubiera que buscar una explicación analítica se encuentra más bien en el argumento de la circulación de las élites políticas (Mosca, 1984; Pareto, 1985): la necesidad de que para mantener estable un sistema política es conveniente que exista la posibilidad de una sustitución continua de los gobernantes, con lo que los interesados tienen la expectativa de aspirar a un cargo de representación política en algún momento de su desempeño profesional.

Los estudios sobre el sistema político mexicano, especialmente los realizados por extranjeros (Smith, 1981; Camp, 1981) han confirmado el argumento anterior al mostrar que una de las características destacadas del caso mexicano en el siglo XX fue la circulación de los diversos grupos o camarillas, lo que permitió una renovación continua de los cuadros políticos, aunque aquellos fueran del mismo grupo general pertenecían a camarillas diferentes. Esto terminó con la alternancia política, primero, en el legislativo en 1997 y luego en el ejecutivo en el año 2000.

Es en la circulación de las élites políticas donde puede encontrarse la explicación de las limitaciones establecidas en 1917, que de alguna manera fueron matizadas en la reforma constitucional de 2014 pero que siguieron manteniendo restricciones parciales como son la temporalidad a algunos periodos o el requisito de ser postulado por el mismo partido que inicialmente hubiera presentado la postulación.

Para analizar las limitaciones anteriores proponemos utilizar la perspectiva de la gobernanza electoral por sus contenidos y dimensiones (Marchetti, 2012; Da Silva, 2014), además de ser un enfoque de índole académico que permite comparar elementos diferentes en temporalidades diversas, esto es, la posibilidad de hacer comparaciones sincrónicas de contenidos y dimensiones (Brenes, 2014; Medina y Ramírez, 2015; Gilas, 2016).

La gobernanza electoral se divide en tres fases o arenas: la legislativa, la administrativa y la jurisdiccional (Mozzafar y Schedler, 2002); en época reciente también hay que considerar la revisión que realizan los órganos garantes de los derechos humanos en las diversas regiones del mundo que posibilitan la evaluación de las decisiones jurisdiccionales nacionales (Medina, Hernández y Ramírez, 2015).

Así, la gobernanza debe entenderse como un ciclo que tiene su inicio en la arena legislativa que continúa su aplicación en la arena administrativa y que puede ser corregida por la arena jurisdiccional, ya sea en el ámbito nacional o supra nacional y que dependiendo de la modificación puede ser re activado el ciclo completo desde la etapa legislativa o bien regresar la decisión a la fase administrativa. En el ámbito electoral lo normal es que la decisión sea regresada a la arena administrativa y solamente después de concluido el proceso comicial se vuelve a discutir en la arena legislativa.

En este ciclo de la gobernanza electoral el rol de la jurisdicción es notable porque dependiendo de las regulaciones nacionales puede hacerse cargo de la revisión incluso antes de la aplicación administrativa como en la cuestión constitucional francesa o como en la acción de inconstitucionalidad mexicana. Aunque lo recurrente es que participe después de la fase administrativa, aplicando regulaciones específicas de carácter legal y reglamentario como en el caso español con las juntas electorales y el Tribunal Constitucional o el mexicano con los tribunales electorales, tanto los sub nacionales como el nacional con la sala superior y las salas regionales.

Las dimensiones de la gobernanza electoral están directamente relacionadas con el proceso comicial: reglas, autoridades, actores y niveles, dependiendo de que las elecciones sean nacionales o sub nacionales. Las reglas son responsabilidad de los legislativos correspondientes; las autoridades tienden a ser de dos índoles: administrativas y jurisdiccionales, aunque hay casos donde existe solo una autoridad que cumple las dos funciones; finalmente, los actores son los partidos, los candidatos y, si están contemplados, los ciudadanos que pueden postularse sin respaldo partidario. Con estas cuatro dimensiones

y las cuatro arenas o fases pueden hacerse los análisis de contenidos que se consideren pertinentes como mostró Pastor en su estudio seminal sobre la administración electoral que es detallado en las aplicaciones pero poco cuidado en lo correspondiente a la jurisdicción.

En esta ponencia el contenido bajo análisis es la elección continua de cargos de representación popular o re elección limitada que tuvo su generación en la reforma constitucional de 2014, lo cual matizó las restricciones contenidas en el texto fundacional de 1917 como fue explicado anteriormente. En el apartado siguiente veremos los contenidos constitucionales y legales de la no re elección además de su posterior modificación.

La regulación mexicana sobre re elección consecutiva y limitada

La constitución mexicana de 1917 postuló la no elección consecutiva como uno de sus contenidos centrales, producto tanto de la herencia revolucionaria como del aprendizaje político durante el porfiriato y, de alguna manera, de la inestabilidad padecida durante el siglo XIX. En términos de la gobernanza electoral, la no elección consecutiva fue una decisión política que se incorporó tanto al texto constitucional como a la legislación. De ahí que no hubo aplicación ni polémica jurisdiccional salvo en el caso notorio de Obregón quien logró ser re electo pero que su muerte imposibilitó de hecho tal re elección.

Así, la elección consecutiva estuvo prohibida en la arena legislativa con lo que no hubo necesidad de contemplarla ni en la arena administrativa ni en la jurisdiccional con lo que la única dimensión contemplada fue la de las reglas nacionales y sub nacionales para que los diferentes ordenamientos legales replicaran la restricción constitucional estipulada en 1917 y que fue endurecida a partir de 1928, después de la muerte de Obregón.

En el siglo XXI mexicano llegaron la alternancia política y el momento para discutir la posibilidad de la elección continua. Es interesante notar que fue más sencilla incluso una doble alternancia en la presidencia de la república que la polémica sobre la re elección, con

lo que se confirma la idea de que la segunda es más bien un producto endógeno y herencia del siglo XIX mexicano que propiamente una discusión analítica.

La reforma constitucional de 2014 fue planteada como una propuesta amplia y profunda de cambios incluso en el sistema político y en la reforma del estado (Alarcón, 2016); sin embargo, los contenidos modificados por la reforma fueron más bien en el ámbito del régimen electoral y en algunos ajustes del régimen constitucional, especialmente en lo correspondiente al proceso de selección y designación de las autoridades electorales y en lo concerniente a la elección consecutiva de legisladores e integrantes de los ayuntamientos.

En los artículos 59, 115, 116 y 122 de la constitución reformada el 10 de febrero de 2014 están contenidas las nuevas estipulaciones para la elección consecutiva de legisladores federales y locales, además de los integrantes de los ayuntamientos. En el 59 constitucional están las reglas para senadores y diputados federales, mientras que en los artículos 115 y 116 están contenidas las estipulaciones para diputados locales y munícipes, en el caso de la Ciudad de México tal regulación está en el 122 constitucional y en la nueva ley fundamental de la ciudad. En términos de la gobernanza electoral, la arena legislativa estableció un sistema de reglas general, que se aplica tanto en el nivel nacional como en el sub nacional para diversos cargos de elección popular y con varias restricciones:

Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. (Art. 59, énfasis añadido).

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. (Art. 115, énfasis añadido).

Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. (Art. 116, énfasis añadido).

En el caso de los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que a partir de 2018 será el congreso de la Ciudad de México, la constitución federal establece que se aplicarán las mismas reglas contenidas en el artículo 59, esto es, las estipulaciones para los diputados federales: hasta cuatro mandatos consecutivos con el requerimiento que los debe postular el mismo partido inicial y que la única excepción es por renuncia o pérdida de militancia en el año y medio inicial de su mandato, después si la postulación la realiza por otra vía no debe ser considerada por la autoridad electoral.

Es conveniente analizar las reglas constitucionales con detenimiento para entender el sentido que le pretendió dar el constituyente permanente, ya que en tales modificaciones intervinieron el congreso federal y los congresos estatales. Lo primero que salta a la vista es la lógica de ciclos sexenales: los dos periodos para senadores o los cuatro para diputados o los dos para municipales, en todos los casos están atados a la temporalidad sexenal de los ejecutivos, ya sea en las gubernaturas o en la presidencia. Pareciera que el argumento del priísmo sociológico de Molinar (1993) se mantiene presente en clave presidencial porque el constituyente permanente no fue capaz de plantear otras temporalidades diferentes a los ciclos de los ejecutivos.

El caso más llamativo al respecto es el de los municipales que solamente pueden optar por una elección consecutiva adicional y después de esa posibilidad tienen que buscar indefectiblemente otro cargo, ya sea local o federal pero no en el ámbito municipal. Pareciera esta la confirmación de la hipótesis sobre la circulación de las élites: los cuadros políticos que puedan re elegirse pero de manera limitada para que nuevos aspirantes puedan acceder a la postulación y con eso evitar deserciones o enfrentamiento internos; el siglo XX mexicano se mantiene presente en el imaginario de los políticos.

La regla que más denota la situación anterior es la correspondiente a que la postulación para una eventual elección consecutiva solamente puede ser llevada a cabo por el partido que inicialmente realizó la postulación y que la excepción a lo anterior se puede efectuar únicamente por renuncia del mismo candidato al partido o bien porque el partido hubiera

declarado la pérdida de militancia del candidato. Esta regla si bien se comprende que sea una barrera al aventurerismo político también es una limitación que pretende fortalecer a los partidos al ser ellos los únicos que pueden controlar las postulaciones porque los gobernantes que pretendan continuar su trayectoria sin el partido tienen que renunciar a aquél en una fecha temprana como es la primera mitad de su mandato, ya que pasando éste Rubicón están vinculados al partido o deben aceptar no tener oportunidad de postularse de nuevo porque la autoridad electoral debe rechazar su solicitud, esto último se confirma con la regulación legal nacional y sub nacional:

g) Los candidatos a las Cámaras del Congreso de la Unión y de los Congresos de las Entidades Federativas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la Constitución en materia de reelección.

...

6. La solicitud de registro de las listas de representación proporcional a que se hace referencia en los dos párrafos anteriores, deberá especificar cuáles de los integrantes de cada lista están optando por reelegirse en sus cargos y el número de veces que han ocupado la misma posición de manera consecutiva. (art. 238 de Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales, Legipe)

Está claro en la legislación de la materia que los gobernantes que pretendan postularse sin el aval del partido que inicialmente los propuso tienen que ser denegados por la autoridad al no cumplir con uno de los requisitos básicos: la postulación por el mismo partido. Así, los gobernantes que pretendan la elección consecutiva tienen que aceptar las reglas de su partido o bien renunciar a su militancia antes de la mitad de su mandato y buscar la postulación en otra organización política o como candidatos sin partido.

Si bien se comprende que el derecho a la elección consecutiva no sea necesariamente un derecho humano, es bastante dudoso que tal posibilidad éste contenida con tales limitaciones porque en el fondo de la cuestión pareciera ser más un asunto de los partidos que de los candidatos para no decir nada de los ciudadanos. Si las limitaciones en las temporalidades son entendibles por la historia mexicana, los requerimientos de postulación y su vínculo con los ciclos sexenales son cuestionables porque pareciera que en la regla general es posible la elección consecutiva pero en la regla específica se torna difícil tal

posibilidad y esta es la dificultad que ya enfrentan las autoridades electorales. En el apartado siguiente analizamos un caso que ya tuvo que resolver la jurisdicción en 2017 y que vislumbra las problemáticas que se presentarán en 2018 con las elecciones generales del año venidero.

Las dificultades de los órganos electorales para aplicar la re elección: las demandas que se han presentado ante los tribunales electorales y las respuestas de la jurisdicción

En 2017 hubo cuatro elecciones sub nacionales, además de varios comicios extraordinarios. En Veracruz la elección fue solamente de ayuntamientos, mientras que en Coahuila y Nayarit fueron comicios para elegir gobernadores, diputados y munícipes, en el Estado de México la elección fue solamente para gobernador.

De acuerdo a las disposiciones constitucionales aprobadas en 2014 los diputados de Coahuila y Nayarit, además de los integrantes de los ayuntamientos de esos estados y de Veracruz podrían presentarse a la elección consecutiva. En Nayarit, que es el caso de estudio, se presentó la peculiaridad de que el mandato de los munícipes electos en 2017 durarán cuatro años para empatar el calendario local con el nacional en 2021 que habrá elección de diputados federales junto con varios comicios locales. Y justo la temporalidad del mandato por cuatro años fue la que desató la dinámica jurisdiccional, veamos el caso de la sentencia de Nayarit: sup-jdc-101 y sup-jrc-63 ambas de 2017.

Un alcalde en funciones realizó una consulta al órgano administrativo electoral nayarita acerca de la posibilidad de presentarse para una elección consecutiva en razón de que a la fecha de la consulta era presidente municipal del ayuntamiento de Ahuacatlán, Nayarit. El órgano administrativo por medio del consejero presidente le contestó en sentido negativo ya que no era posible su postulación, en virtud de la regla constitucional que establece la elección consecutiva solamente en periodos de tres años y como la temporalidad del encargo electo en 2017 será de cuatro, entonces, no era factible su postulación. Tal decisión fue ratificada posteriormente por un acuerdo del órgano administrativo nayarita.

Inconforme con la respuesta que le fue dada por la instancia administrativa, el alcalde en funciones de Ahuacatlán junto con un partido político (PRD) promovieron sendas impugnaciones para cuestionar el contenido del acuerdo administrativo. Las dos demandas fueron acumuladas y si bien tendrían que haber sido resueltas por la sala regional Guadalajara al ser un tema de interés, trascendencia e interpretación constitucional fue resuelto por la sala superior en una sola sentencia.

Antes de analizar la sentencia de sala superior son convenientes dos comentarios y precisiones. El órgano administrativo nayarita al generar la respuesta inicial del consejero presidente cumplió con el mandato de contestar las peticiones debidamente fundadas y motivadas, esto mismo sucedió con el acuerdo impugnado; sin embargo, lo que el órgano administrativo dejó de realizar fue una interpretación amplia de las limitaciones constitucionales y de relacionar los diversos artículos que tanto en las reglas nacionales como en las sub nacionales contienen las características para la elección consecutiva. El órgano administrativo de Nayarit se limitó a contestar que no era posible su postulación por la taxativa constitucional del encargo de tres años y al ser la elección para cuatro no podría ser considerada la nueva postulación. Esto muestra las limitaciones interpretativas de los órganos sub nacionales como ha sucedido en asuntos de representación proporcional, de género y de recuentos de votación.

El otro comentario es que en el caso bajo análisis, el órgano administrativo de Nayarit se auto limitó al considerar que no podría realizar un ejercicio de relación y ponderación mayor sino que debía dar una respuesta más de carácter formal que de índole sustancial para explicar porque consideraba que la posible postulación para una elección consecutiva del alcalde de Ahuacatlán no era factible desde el mundo normativo, a pesar de existir excepciones y particularidades que podrían permitirlo.

En este sentido la sentencia de sala superior es una pieza dialógica más construida que el acuerdo del órgano administrativo. La sentencia revisa el caso desde una óptica diferente que está anunciada desde las páginas 4 y 8 cuando establece que efectivamente existe un conflicto normativo y que es dable una solución a la causa de pedir de los demandantes.

Esto se confirma en el considerando quinto de la sentencia sobre la pretensión al afirmar que el propósito de los demandantes consiste “...en que se permita a los integrantes de los Ayuntamientos de Nayarit, electos para el periodo 2014-2017, participar para un segundo periodo consecutivo...” Que en este sentido el acuerdo impugnado restringe la elección consecutiva y, que al decir de los impugnantes, la base del mismo es una “... indebida interpretación de las Constituciones Federal y Local.” (p. 31, versión PDF) Sobre este punto gira la decisión de sala superior.

El contenido de la sentencia se encuentra de la página 55 en adelante. Una vez que revisa las regulaciones, la sala superior establece que es válida la temporalidad de cuatro años para los ayuntamientos nayaritas y además apunta que tal determinación ya fue analizada en una acción de inconstitucionalidad, por lo que concluye: “...que previo a la elección municipal de dos mil veintiuno, es factible que se lleven a cabo elecciones consecutivas de integrantes de ayuntamientos en dos mil diecisiete, cuya duración del mandato, excepcionalmente, será de cuatro años.” (p. 59, versión PDF)

Para llegar a la conclusión anterior, la sala superior consideró que se deben relacionar las restricciones contenidas en las reglas constitucionales con la posibilidad de la elección consecutiva y que la temporalidad excepcional de los cuatro años que durarán los ayuntamientos nayaritas no es suficiente justificación para negar a los interesados la posibilidad de postularse para la re elección.

“...la Sala Superior considera que ambas disposiciones [las contenidas en el artículo 115 constitucional y en el transitorio cuarto de la reforma de 2014] inevitablemente deben relacionarse e interpretarse conjuntamente, al ser evidente que existe un interés por parte de funcionarios municipales electos para el periodo 2014-2017, de eventualmente participar en una elección consecutiva bajo el mismo cargo, y para el cual, el periodo del mandato del futuro ayuntamiento se extendió a cuatro años por una disposición transitoria cuyo contenido se declaró válido.” (p. 61, énfasis añadido, versión PDF)

La sentencia reconoce que existe un conflicto normativo derivado de una situación empírica que se confronta con una situación normativa con deficiencias y acoplamientos. Ante esta

problemática, la sala superior considera que es indispensable, inevitable, realizar un ejercicio de relación e interpretación conjuntas para encontrar la mejor salida posible a la demanda promovida por los impugnantes. Es interesante el reconocimiento de las dificultades normativas por la instancia jurisdiccional porque en el fondo entraña una suerte de objeción a la arena administrativa por la negativa pero sobre todo un señalamiento a la arena legislativa por las fallas en el diseño de las reglas: esta es la fortaleza de la gobernanza electoral permite analizar los procesos comiciales y no solamente verlos como una buena práctica como lo proponen otras perspectivas.

Al realizar el ejercicio de relación e interpretación, la sentencia encuentra que el criterio adoptado por la instancia administrativa es contrario a la posibilidad de re elección "...y restrictivo del ejercicio del derecho al voto pasivo y activo..." (p. 63, versión PDF), esto es, el criterio administrativo restringe el derecho a votar y ser votado, específicamente al segundo aunque el primero también tiene implicaciones porque entraña la posibilidad de que los gobernados ratifiquen a los gobernantes, lo que es el sentido primigenio de la elección consecutiva: reconocer el trabajo de quienes gobiernan aprobando su continuidad. La sentencia finaliza estableciendo que:

"Bajo esta perspectiva, es dable colegir que, para la elección de los integrantes de los ayuntamientos del Estado de Nayarit, a celebrarse en dos mil diecisiete, no existe algún impedimento constitucional para quien pretenda ser electo (por vez primera o mediante la elección consecutiva para el mismo cargo) por un periodo de cuatro años. (p. 64, versión PDF).

Con la consideración final, la sentencia les da la razón a los impugnantes y permite que el ciudadano, entonces, presidente municipal en funciones de Ahuacatlán sea registrado como candidato de nuevo al cargo de alcalde por el mismo partido que lo había postulado en la elección inicial, con lo que resuelve el problema jurídico a favor de los impugnantes y dio la posibilidad de que los votantes confirmaran o rechazaran al gobierno municipal en funciones en ese momento. También con ello la instancia jurisdiccional corrigió una decisión de la arena administrativa y envió una indicación al legislativo de los problemas

normativos suscitados en un mal diseño normativo, además de sentar un criterio de interpretación relacional y armónica para casos similares.

Algunas reflexiones a manera de conclusiones provisionales.

Tanto la literatura relacionada con la re elección como la vinculada a la representación política sostienen que la elección consecutiva es una facultad de los electores para confirmar un gobierno más que una facultad de los posibles electos para continuar en los cargos de representación pública, esto es así porque se supone que el control de la continuidad o cambio de un gobierno está en los votantes más allá de las decisiones partidarias o de los mismos gobernantes para continuar en el encargo público.

Esta es la discusión acerca de la re elección o elección consecutiva que no se ha querido plantear en el caso mexicano: la posibilidad no tiene que ver con el derecho a ser votado sino con el derecho a votar la continuidad de los gobernantes que se encuentran en funciones y que pueden ser considerados de manera positiva por parte de los electores.

Como se indicó anteriormente, la sentencia de sala superior indica que la posibilidad de una elección consecutiva está relacionada con el derecho al voto activo (votar) y pasivo (ser votado). Es claro que en el caso bajo análisis la disputa estaba en el voto pasivo, empero, el reconocimiento de la sentencia apunta al tema complejo del voto activo de los ciudadanos por mantener a un gobierno y en esto me quiero centrar.

Como mencioné antes, es comprensible que la re elección no sea vista como un derecho humano, ya que al final de cuentas es únicamente una posibilidad la cual requiere la confirmación por parte de los votantes, lo que convierte a la elección consecutiva en una mediación, en un mecanismo para conseguir una finalidad que es la decisión última de los gobernados, de ahí que desde la perspectiva del voto pasivo sea cuestionable la elección consecutiva como un derecho humano; sin embargo, no pasa lo mismo desde la perspectiva del voto activo de los ciudadanos, veamos esto a continuación.

Desde las teorías de la democracia como desde las de la representación política e incluso desde las de la interpretación constitucional está claro que son los ciudadanos en su calidad de electores los que deben decidir sobre la permanencia o no de un gobierno. Ya Locke habría señalado no todo el poder en las mismas manos, ni siempre los mismos, que fueron las bases para la división de poderes y para la convocatoria regular a las elecciones.

El planteamiento de Locke partía, empero, de la posibilidad de que los electores decidieran mantener al gobierno, esto era así porque era factible que en la reflexión de los votantes fuera mejor la continuidad que la posible modificación de un gobierno. En todo caso tal decisión recaía en los electores, por lo que los gobernantes deberían tener la posibilidad de postularse para continuar en el encargo, con lo que la fortaleza de la re elección estuvo en el derecho a votar y no en el derecho a ser votado.

Tan esto ha sido históricamente que cuando se revisan los casos, incluyendo el mexicano, en el origen no existían restricciones a la posible re elección porque se consideraba más un derecho de los gobernados para ratificar a los gobernantes que un derecho de éstos para postularse continuamente al mismo cargo de representación política. Las restricciones y limitaciones vinieron después y tienen su explicación en las historias políticas nacionales.

De esta manera la elección consecutiva en su vertiente de derecho activo sí tiene una relación con los derechos humanos porque establece el principio de que los ciudadanos decidan confirmar o remover al gobierno en turno. De hecho, la sentencia bajo análisis también indica a los derechos a votar y ser votado en su relación con el principio a favor de la persona y las consecuencias políticas que esto provocó: la posibilidad de postularse a la elección continua por parte del presidente municipal en funciones de Ahuacatlán, Nayarit.

Ahora bien, más allá del caso concreto las autoridades electorales, específicamente las jurisdiccionales bien harían en sentar una política judicial para el tema de la elección consecutiva porque por los próximos años seguramente se van a presentar demandas por el interés de varios gobernantes para volverse a postular al cargo y debido a los errores en el diseño normativo inevitablemente van a terminar en la instancia jurisdiccional para ser resuelto y sería pertinente que se tuviera una respuesta general para casos similares.

Referencias

Alarcón Olguín, Víctor. 2016. *Reformas político electorales 2012-2014 y régimen de gobierno*. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Brenes, Diego. 2014. *El rol político del juez electoral*. San José: Tribunal Supremo de Elecciones.

Camp, Roderic Ai. 1981. *La formación de un gobernante*. México: Fondo de Cultura Económica.

Da Silva Touroco, Gabriela. 2014. “Electoral Governance and Legislative Elections in South America“. Montréal: ponencia al Congreso Mundial de Ciencia Política.

Gilas, Karolina y Christiansson, Mikaela J. 2016. “El nuevo modelo de fiscalización: la reforma fallida“ en *Revista Mexicana de Derecho Electoral*, número 16. México: UNAM.

Manin, Bernard. 1998. *Los principios del gobierno representativo*. Madrid: Alianza.

Marchetti, Vitor. 2012. “Electoral Governance“. São Paulo: *Brazilian Political Science Review*, número 1, ABSP.

Medina Torres, Luis Eduardo. 2016. *Gobernanza y régimen electoral en la reforma política de 2014*. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Medina Torres, Luis Eduardo; Hernández Olmos, Mariana; Ramírez Díaz, Edwin Cuitláhuac. 2015. “Derechos y Constitución en el México actual“ en *Surcando la democracia*. México: Iberoamericana/Fontamara.

Medina Torres, Luis Eduardo y Ramírez Díaz, Edwin Cuitláhuac. 2015. “Electoral Governance, more than just Electoral Administration“ en *Mexican Law Review*. México: UNAM.

Molinar, Juan. 1993. “Escuelas de interpretación“ en *Revista Mexicana de Sociología*. México: UNAM.

Mosca, Gaetano. 1984. *La clase política*. México: Fondo de Cultura Económica.

Mozzafar, Shaheen y Schedler, Andreas. 2002. "Electoral Governance" en *International Political Science Review*, número 5. Montréal: IPSA.

Pareto, Vilfredo. 1985. *La transformación de la democracia*. Madrid: EDERSA.

Pastor, Robert. 1999. "Electoral Administration" en *Journal of Democratization*. S/E.

Smith, Peter H. 1981. *Los laberintos del poder*. México: COLMEX.

Stuart Mill, John. 2007. *Sobre el gobierno representativo*. Madrid: TECNOS.